

III. Irlanda del Norte: panorama ejemplar para solucionar conflictos desde un uso efectivo de la comisión de la verdad

Introducción

Cuando un país se encuentra al límite por la confrontación entre sus habitantes, ya sea porque luchan en búsqueda de intereses particulares, la proclamación de territorio, la intransigencia por las diferencias de pensamiento, o simplemente por el querer ejercer el poder; es necesario que el Estado tome medidas para controlar ese conflicto. Para llevarlo a cabo se deben utilizar diferentes medios, por lo tanto, Burton (1990) aduce:

La práctica de la resolución de conflicto como solución de problema, se deduce de la teoría del conflicto como una respuesta universal a necesidades frustradas. La práctica implica aportar oportunidades para las partes: primero, analizar las relaciones para generar una definición exacta de los problemas en términos de motivaciones y necesidades humanas; segundo, valorar los costos de políticas y metas una vez que se cuenta con información completa de todos los aspectos de la disputa, incluidas las motivaciones y valores de los lados opuestos; y tercero, descubrir las posibles opciones disponibles una vez que se ha analizado el conflicto y todos sus elementos. (p. 8)

[65]

Así, resulta necesaria la consecución de una paz en aras de garantizar los derechos de los ciudadanos; lejos de confrontar las diferencias por medio de la violencia. Por ello, los diversos enfoques de solución de conflictos varían dependiendo el contexto de cada país y el tratamiento que le quiera dar al logro de la paz. Al respecto, Irlanda del Norte optó por la creación de una campaña por la justicia social, una liga de los ciudadanos sin hogar; realizado por un partido laborista de Irlanda del Norte y la asociación de derechos civiles del mismo país (encargados de proteger los derechos civiles de los católicos).

Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes, cayeron en la necesidad de adoptar otros mecanismos, como la firma de un acuerdo de paz Acuerdo del Viernes Santo. Este implicaba la aplicación de la justicia transicional en pro de garantizar los derechos proclamados por las diferentes minorías. Asimismo, se negociaron diferentes aspectos sociales, culturales y políticos con el objetivo de satisfacer las necesidades de las partes que firmaron.

Dentro de lo pactado se previó la creación de la asamblea de Irlanda del Norte, la creación de una comisión para revisar el papel de la policía del Ulster, y demás organismos involucrados en el conflicto. Ellos propondrán sugerencias para convertirlos en un cuerpo no sectario y desligado de la represión; además del desarrollo de la unidad central de relaciones comunitarias, el consejo de relaciones comunitarias y posteriormente la comisión independiente internacional de desarme.

Una vez aclarado este aspecto, se procederá a analizar la Comisión de la Verdad (también llamada comisión de víctimas). Este constituyó un órgano creado para investigar patrones de violencia ocurridos en Irlanda del Norte durante un tiempo determinado, así como buscar una transición hacia la paz. Sin embargo, ha sido estigmatizada para diferentes autores como una comisión obsoleta, insuficiente y desacreditada. Por lo tanto, surge el siguiente problema jurídico: ¿Resulta necesario el uso de una Comisión de la Verdad y qué aspectos debe llevar a cabo esta entidad para que cumpla efectivamente su objetivo de aportar a la paz?

Como semillero de investigación, se ha hecho imperiosa la necesidad de dar solución a este cuestionamiento. El Acuerdo del Viernes Santo es un precedente para los demás países que quieran iniciar una negociación con las partes conflictivas; incluso para aquellos que ya consolidaron un acuerdo y han empezado a cumplir con las políticas acordadas.

La última corresponde al caso de Colombia. Actualmente se encuentra inmersa en el “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Específicamente, prevé el uso de una Comisión de la Verdad. Por ello, se plantea dar un panorama sobre el verdadero desarrollo que debe tener una comisión de este tipo;

además de mejorar los aspectos que el derecho comparado ha resaltado como graves problemáticas en su funcionamiento. Lo anterior, para que no decaer en organismos estatales inoperantes o superfluos.

Historia del conflicto norirlandés

El conflicto en Irlanda del Norte se vio prolongado por varias causas fundadas principalmente por las diferencias entre sus habitantes. Al respecto se puede decir que su origen subyace luego de 1920, cuando Gran Bretaña decide dividir el territorio y mantener bajo su soberanía a seis de los nueve condados, de una de las cuatro provincias de Irlanda, llamada provincia Ulster cuyá capital es Belfast.

Empero, esta investigación se centra en el conflicto actual que comprende básicamente desde las marchas por los derechos civiles de los católicos de Irlanda del Norte. Es decir, aproximadamente a finales de 1960, con la llegada de las tropas británicas, el 14 de agosto de 1969; hasta las declaraciones de tregua por parte de las principales organizaciones paramilitares de la zona, en agosto y octubre de 1994; así como las efectuadas el 10 de abril de 1998 y sus posteriores.

Es de resaltar esta etapa del conflicto. Conforme a la opinión de Méndez (2004), se aduce que en los últimos 30 años hubo 3600 víctimas mortales y más de 30 mil heridos aproximadamente. El fenómeno del conflicto se desarrolla por los problemas etnonacionalistas, como la problemática entre católicos y protestantes en asuntos religiosos y culturales; nacionalistas que desean la separación del Gobierno británico para que Irlanda sea una nación unida.

Asimismo, los unionistas defienden la pertenencia de Irlanda del Norte al Reino Unido y rechazan su unión con Irlanda en una sola nación; en la mayoría, sus miembros eran protestantes. En este sentido, los republicanos piensan semejante, optan por una Irlanda unida a cualquier precio, incluyendo la violencia y la mayoría son católicos. Estos actores han chocado sus posturas para conquistar o reconquistar un mismo espacio que proclaman como propio.

Contextualización del conflicto armado y su proceso de paz.

Con los diferentes sometimientos y rechazos vividos por los católicos, se vieron en la necesidad de luchar por sus derechos humanos. Esta idea fue reforzada por la vuelta al poder en enero de 1964 del partido laborista en Westminster. Allí también el Ejército Republicano Irlandés (IRA) optó por asimilar un punto de vista marxista para analizar el problema irlandés, rechazando la violencia. A partir de estos hechos, Sierra (1999) aduce que:

Durante los años sesenta diversas organizaciones como la Campaña por la Justicia Social (CSJ, Campaign for Social Justice), la Liga de los Ciudadanos sin Hogar (HCL, Homeless Citizens League), o el Partido Laborista de Irlanda del Norte (NILP, Northern Ireland Labour Party) reclamaban derechos civiles para los sectores más desfavorecidos de la sociedad, formados mayoritariamente por católicos. (p. 101)

[68]

Sin embargo, no fue hasta la fundación de la Asociación de Derechos Civiles de Irlanda del Norte (NICRA, por sus siglas en inglés *Northern Ireland Civil Rights Association*)¹⁷ que se empezó a asentar el proteccionismo a los derechos. Esta organización buscaba reformar el tradicional nacionalismo irlandés, dándole un nuevo aire a la política de Irlanda del Norte, previamente hegemonizada por el conservador partido Unionista del Ulster (UPP). El propósito de esa asociación también comprendía la lucha por una sociedad más liberal y el reconocimiento de los derechos civiles y políticos; su conformación estaba a cargo de una gran población católica y otro tanto de protestantes, el único escenario para su integración.

¹⁷ La NICRA tenía por objeto la protección de derechos civiles de las minorías católicas.

Una vez asentado el NILP, en mayo de 1967 la política comenzó a trasladarse del parlamento a las calles. El partido propuso la reforma del sufragio universal en las elecciones municipales con el lema “un hombre, un voto” (en inglés, *one man, one vote*) o el Sinn Féin.¹⁸ La principal herramienta de lucha que ejercía el NICRA eran las marchas y manifestaciones no violentas. No obstante, esta forma de lucha se convirtió en el foco de protestas violentas y asaltos contra la población civil, en especial, se conllevó a la ejecución de católicos con una matanza indiscriminada.

Por lo tanto, el 14 de agosto de 1969 el Gobierno laborista de Londres mandó las primeras tropas con el objetivo de restaurar la “ley y el orden”. Consecuentemente, el IRA (también considerado como un grupo paramilitar u organización terrorista) comenzó a reagruparse para participar en el conflicto; anteriormente había dejado de efectuar intervenciones, a lo cual su participación resultó por medio de la coacción (Sierra, 1999).

No obstante, esta crisis llevó a la realización de treguas o alto al fuego, condiciones consideradas como las bases para el posterior proceso de paz. Algunas empezaron el 31 de agosto de 1993 donde se habló de un cese completo de las operaciones militares; la última tregua fue por parte del IRA en julio de 1997. Posteriormente, el 10 de abril de 1998 se firmó el Acuerdo de Viernes Santo. De Gamboa (2010) explica que el acuerdo pretendía proporcionar un nuevo marco de trabajo que suscribe y replantea las posiciones nacionalistas de la comunidad.

En otras palabras, constituye una declaración de voluntad entre nacionalistas y unionistas de reconocer y respetar las diferencias culturales y políticas de la comunidad norirlandesa. Entonces, respetando los derechos humanos, la tolerancia mutua y el ánimo de reconciliación; rechazando las vías de hecho como medio de solución y reconociendo la ley y el diálogo como la única forma válida de convivencia. De igual manera, el periódico *El Herald* junto con la Universidad Autónoma del Caribe (2016) afirmó que el acuerdo concluyó seguir bajo la soberanía de la Gran

¹⁸ El Sinn Féin es un partido político que ha tenido vínculos con el IRA; además, reclamó un proceso de paz honorable y serio para el Ulster, así como el establecimiento de un diálogo genuino con Londres. Para más información véase Ansa-Reuter (1994). Según el Sinn Féin, la paz triunfará.

Bretaña, con una autonomía limitada y el posible uso del derecho a la autodeterminación. Por lo tanto, se crearon una serie de estructuras políticas bajo la garantía de los Gobiernos de Londres y Dublín.

En este sentido, algunos entes independientes apoyaron el proceso de paz como la administración Clinton. Dicho gobierno ayudó a solucionar la crisis de la región a punto de interrumpirse cuando el IRA realizó un brutal atentado en Omagh y existieron grandes dificultades para formar un gobierno autónomo en el verano de 1999.

Sin embargo, este antecedente no fue desalentador, ni motivo para abandonar lo concertado. A pesar de las luchas después de la firma del acuerdo, se pudo consolidar la paz luego de varios años de intentos por seguir desarrollando lo pactado. Dicha apreciación la hace Vargas (2016) quien afirma que con el acuerdo de 1998 Irlanda del Norte resolvió su situación de conflicto en los últimos 20 años.

Acuerdo de paz: Acuerdo del Viernes Santo

[70]

El 15 de septiembre de 1997, en el parlamento de Stormont todos los partidos políticos norirlandeses (incluyendo la presencia del Sinn Féin)¹⁹ comenzaron a negociar un acuerdo que normalizara la vida política de la región; así, propusieron aceptar y cumplir los principios de Mitchell,²⁰ es decir, estar al margen de la violencia. El no cumplimiento de estos principios supondría automáticamente la expulsión, temporal o completa, de la mesa negociadora.

Cabe resaltar que el texto del Acuerdo del Viernes Santo se sometió a un referéndum ciudadano el 22 de mayo de 1998. Allí se tuvo en cuenta la opinión del pueblo quien decidiría si estaba (o no) de acuerdo con lo negociado. Sierra (1999) resume el contenido de lo estipulado, a continuación.

¹⁹ Era la primera vez que el Partido Republicano participaba en un foro multilateral.

²⁰ Según Letamendia (2009), estas condiciones, conocidas como los Principios Mitchell, consistían en el compromiso de los partidos con: Los medios democráticos y exclusivamente pacíficos para resolver los problemas políticos. El total desarme de todas las organizaciones paramilitares. Tal desarme debía ser verificable por una Comisión Independiente. Renunciar, oponerse a todo intento de usar

Primero, hasta el momento el deseo mayoritario de la población norirlandesa es mantener la unión con Gran Bretaña. No obstante, si en el futuro el pueblo de la isla de Irlanda quisiera la autodeterminación, sería obligación de ambos Gobiernos poner en marcha los mecanismos para decidir al respecto. Segundo, el rechazo absoluto de la violencia utilizada con el fin de resolver cuestiones políticas y el apoyo para solucionar los conflictos por la vía pacífica y democrática. Tercero, avanzar hacia la reconciliación y el acercamiento entre católicos y protestantes dentro de un marco democrático y de consenso.

Cuarto, la creación de una asamblea de Irlanda del Norte compuesta por 108 diputados y elegida democráticamente en representación de la sociedad. Este nuevo parlamento ejercería el poder ejecutivo y legislativo; además, garantizaría la protección de los derechos e intereses de todos los sectores sociales. Quinto, la organización de un consejo ministerial Norte-Sur (*North-South Ministerial Council*) para desarrollar tareas consultivas, de cooperación y actuación en la isla de Irlanda.

[71]

Sexto, la creación de un consejo británico-irlandés (*British-Irish Council*) con la función de fomentar las relaciones entre los ciudadanos de ambas islas (Irlanda del Norte e Irlanda del Sur). Séptimo, la entrega de las armas por parte de todas las organizaciones paramilitares en un plazo de dos años a partir de la fecha de la aprobación de los referendos, estimada para mayo del año 2000. Octavo, el compromiso de los Gobiernos irlandés y británico para la pronta liberación de presos pertenecientes a organizaciones paramilitares que contemplan el alto el fuego.

Noveno, la creación de una comisión para revisar el papel de la policía del Ulster (RUC),²¹ quien propondrá sugerencias para convertirla en un cuerpo no sectario y desligado de la represión. Décimo, la revisión del sistema de justicia penal y de las políticas sobre derechos humanos e

la fuerza, o amenazar con usarla, a fin de influir en el curso de las negociaciones de todos los partidos. Recurrir a medios democráticos y exclusivamente pacíficos para intentar modificar cualquier aspecto de lo discutido en las negociaciones de todos los partidos. Según los Principios, pues, los únicos medios para resolver los problemas políticos y para intervenir en las discusiones debían ser los medios democráticos y exclusivamente pacíficos.

²¹ Agencia de policía del Reino Unido.

igualdad entre las comunidades. Finalmente, el cambio de segundo y tercer artículo de la Constitución de 1937 de la República de Irlanda.

En el referéndum del 22 de mayo de 1998 la participación fue masiva; conforme al autor Vicenç (2011), en Irlanda del Norte votaron un millón doscientos mil personas y en la República de Irlanda hubo dos millones ochocientos mil votantes. En ambos casos ganó el “sí”, lo cual reflejó las ganas de los irlandeses por vivir en paz. La participación en Irlanda del Norte por el “sí” se dividió por los votantes pertenecientes a la comunidad católica quienes apoyaron con un 96% el “sí” y un 4% el “no”. Por la parte protestante, el 50% votó “sí” y el otro 50% “no” o votó en blanco y en la República de Irlanda el 94,39% de los votantes eligió “sí”.

Por consiguiente, para el 10 de abril de 1998 se firmó el Acuerdo del Viernes Santo, también llamado “Acuerdo de Belfast”. Según Arbizu (2011), el Gobierno británico e irlandés, así como las principales formaciones políticas norirlandesas rubricaron, con excepción de varios partidos unionistas. En dicho acuerdo se subrayó la necesidad de establecer el uso de la justicia transicional por medio de un número de comisiones para facilitar los cambios que llegarían para la sociedad.

[72]

Justicia transicional y comisiones.

De acuerdo con Mantilla (2014), la justicia transicional desempeñó un papel protagónico. Su aplicación estuvo incluida en uno de los acápites del acuerdo donde:

Se señala la necesidad de reconocer el sufrimiento y el dolor de las víctimas del conflicto armado, como parte fundamental del proceso de construcción de paz que debía emprender Irlanda a partir del 10 de abril de 1998. Debido a lo anterior, Sir Kenneth Bloomfield fue designado comisionado de víctimas de Irlanda del Norte para elaborar, entre otros, un informe sobre la aplicación de la justicia transicional que se denominó “Las recordaremos”. (p. 5)

Del mismo modo, el Sinn Féin fue reiterativo en la necesidad de crear la comisión. Esta debía investigar el grado y patrón de violencia en los grupos armados y las fuerzas de seguridad; asimismo, establecer las causas y consecuencias de estas prácticas. Conforme a las previas aclaraciones se empezó a solicitar información sobre las víctimas del conflicto; su resultado fue la participación de la población norirlandesa, ONG y entidades privadas.

La Comisión Bloomfield reveló tres estrategias para la reparación de víctimas: “reconocimiento mediante ayuda material... reconocimiento mediante proyectos conmemorativos y... creación de la figura del defensor, que diera consejo y orientación a las víctimas” (p. 5).

Sin embargo, la materialización de esta iniciativa no fue posible. Al respecto, se encontró el caso de los unionistas; a pesar de los cambios de la situación política en Irlanda del Norte, aún mantenían su posición de apoyar únicamente iniciativas que propendieran por evidenciar la historia de las víctimas propias. Además, consideraban innecesario forzar un proceso legal de “contrainterrogatorio” que pudiera llevar a reescribir la historia del conflicto.

[73]

En el mismo sentido, Beristain y Páez (2000) refieren que la comisión de víctimas presentó un informe de revisión sobre algunos hechos del pasado. Por ejemplo, la nueva investigación sobre los asesinatos indiscriminados de católicos; etapa denominada como el “Domingo sangriento de 1972”. Pese a este intento, la comisión no fue aceptada por todos los sectores los cuales argumentaron su ineficacia; al contrario, propiciaba a la violencia, quedando desacreditada.

En lo relacionado con la Comisión de la Verdad el tema se dejará hasta este punto; su totalidad se desarrollará en el siguiente acápite. Posteriormente, se crearon otras entidades para cubrir las funciones atribuidas a la comisión de víctimas pues la institución no pudo mantener y desarrollar sus actividades. Tal fue el caso en 1988 cuando se creó la unidad central de relaciones comunitarias; que cumplía la función de formular y revisar las políticas del Gobierno norirlandés en lo relativo a las relaciones comunitarias entre católicos y protestantes. Luego se creó el Consejo de

Relaciones Comunitarias (CRC) con el objetivo de elaborar proyectos con instituciones y grupos de personas interesadas en afrontar el conflicto de manera productiva.

En adición a los instrumentos mencionados, se estableció el programa “Peace”, financiado por la Comisión Europea para contribuir en el proceso de reconciliación, a nivel nacional y local. Asimismo, se dividió en dos partes: el primer Peace fue desarrollado a partir de 1995 y en el 2000 se inició la segunda etapa. Cada programa tenía el objetivo de “la cohesión entre las comunidades involucradas en el conflicto de Irlanda del Norte y los condados limítrofes de Irlanda; así como la estabilidad económica y social” (Kolodziejski, 2020). De igual manera, Mantilla (2014) asevera que en el Peace II se introdujeron tres criterios para seleccionar los proyectos aprobados, los cuales fueron:

1. El modo como se trata el legado, consecuencia del conflicto (memoria histórica).
2. La adaptación de las oportunidades que surgen del proceso de paz.
3. La promoción de la reconciliación, criterio que aún se está implementando.

[74]

Empero a la firma del acuerdo, la violencia continuó a cargo de aquellas organizaciones armadas opositoras al Acuerdo de Viernes Santo. En consecuencia, Chamorro (2009) explica que para junio de 1998 los lealistas de la *orange order* (en español, orden naranja) causaron la muerte de tres niños católicos. Además, los republicanos del IRA con sed de venganza reivindicaron la bomba de Omagh el 15 de agosto; causando la muerte de 29 personas y cientos de heridos. Posteriormente, Chamorro (2009) aclara:

En el periodo entre 22 de mayo de 1998 (...) y el 12 de marzo de 2007 se han contabilizado 118 muertos, 29 de ellos causados por la bomba de Omagh; la mayoría (66) se produjeron por luchas internas de los propios paramilitares, principalmente de los grupos unionistas. (p. 447)

Por consiguiente, desembocó en la imposibilidad de lograr un acuerdo sobre el desarme. Por ello, en términos de BBC Mundo (2005) el Gobierno autónomo de Irlanda del Norte tuvo una vida muy corta. Desde su establecimiento en 1999, la autonomía fue suspendida dos veces en los años siguientes; asimismo, el tema del desarme efectivo del IRA fue supervisado por la Comisión Independiente Internacional de Desarme (IICD), considerada vital para recuperar el gobierno autonómico. No obstante, los intentos por recuperar este gobierno aun no dan frutos; en este momento el Gobierno de Irlanda del Norte está en manos de Londres.

En suma, en cuanto a justicia transicional y a la implementación de lo negociado en el acuerdo; con miras hacia una construcción de paz y reconciliación entre los irlandeses, el proceso aún está inacabado. Para los puntos relacionados con escenarios de independencia estatal, estos factores aún dejan aseveraciones entre los habitantes, que apoyan (o no) determinada influencia de organización estatal.

A su vez, se realizaron otros actos finalizados en pro del desarrollo por los compromisos políticos, constitucionales, sociales y económicos, los cuales obligaron a los gobiernos a trabajar en la reconstrucción de Irlanda del Norte (González, 2015). Un ejemplo del compromiso se materializó con el régimen de excarcelaciones de los autores del conflicto, sometido a distintos controles sobre el abandono de las armas, la violencia y su adecuada reinserción a la sociedad.

Subsiguientemente, se empezó a hablar de un posconflicto en la sociedad norirlandesa cuando se recibieron los fondos estructurales europeos encuadrados en el programa especial de apoyo para la paz y la reconciliación tanto en Irlanda del Norte, como en los condados fronterizos de Irlanda. Fue renovado posteriormente con el fin de asentar la reconciliación entre protestantes y católicos; así como la buena vecindad en la sociedad norirlandesa, para evitar la violencia, disminuir los índices de discriminación y aumentar la tolerancia.

Por ello, con la sola denominación del posconflicto y la elaboración de diferentes mecanismos para controlar la violencia, se llegó a la conjetura que este acuerdo ha resultado exitoso; no porque lograran todo lo

pactado, sino porque su objetivo principal se cumplió: dejar de lado la violencia y tomar otros caminos de reconciliación, principalmente, entre las partes con ideales religiosos. También entre las partes con ideales políticos donde se existen escenarios propios para dejar claros los diferentes intereses, como es el caso de la asamblea de Irlanda del Norte.

Comisión de la Verdad.

Las comisiones de la verdad son órganos creados para investigar patrones de violencia ocurridos en un país durante un tiempo determinado. Hacen parte de las diferentes medidas (junto con la justicia transicional) para responder a violaciones masivas de derechos humanos ocurridas en el pasado y lograr una transición hacia la paz. Según la página de justicia transicional (2015), las comisiones de la verdad se caracterizan porque recogen información directamente de las personas afectadas (o presuntos responsables), testigos de los hechos u otros intervinientes del conflicto.

El propósito consiste, por un lado, en el reconocimiento de los derechos a las víctimas, el dolor por el que han pasado como actores políticos, para su reparación en las diferentes formas previstas. Por el otro, para que la sociedad en general conozca la verdad sobre los hechos violentos del pasado, las circunstancias en que ocurrieron, quiénes fueron los victimarios, así como sus causas y consecuencias.

De igual manera, las comisiones de la verdad son importantes escenarios de reconciliación y reconocimiento del sufrimiento compartido en sociedades afectadas por la guerra. Son organismos oficiales, de carácter temporal y no judicial. Así, cada país define las condiciones particulares de su Comisión de la Verdad como su composición, definido como un proceso de elección participativo; además, puede incluir amplias consultas a diversos sectores de la sociedad. Por consiguiente, la página mencionada previamente aclara lo siguiente:

Al final de su trabajo –que puede incluir diversas metodologías de investigación como toma de declaraciones, visitas de campo,

consulta de archivos y audiencias públicas-, las comisiones de la verdad suelen consignar en informes finales sus principales hallazgos y conclusiones. La mayoría de las comisiones han identificado responsabilidades políticas de instituciones y algunas, incluso, responsabilidades individuales.

En los informes finales también se incluye un capítulo de recomendaciones en el que se plantean acciones para garantizar reformas institucionales que contribuyan a la no repetición de la violencia. Son hojas de ruta para el desarrollo de programas de reparaciones.

Sin embargo, en la realidad este panorama no es tan alentador y positivo. Como ya se ha explicado, la comisión (llevada a cabo en Irlanda del Norte) no fue de gran utilidad; en consecuencia, resultó ser objeto de diferentes críticas por doctrinantes e historiadores. Tal es el caso de Céspedes y Prieto (2017), quienes rechazan la proposición según la cual la Comisión de la Verdad facilita una mirada al pasado sin constituir una amenaza latente para los máximos dirigentes de las partes en conflicto.

[77]

El incremento del grado de amenaza fue proporcional al nivel de sistematicidad y profundidad realizadas en los informes de las comisiones de la verdad. En Irlanda del Norte actores con gran influencia sociopolítica mantienen visiones completamente distintas de las causas, culpabilidades y responsabilidades de la violencia. Por ende, el proceso de recuperación de la verdad se convierte en un escenario de conflicto por versiones diferentes hacia la memoria y no como un instrumento de reconciliación con el pasado. Los procesos políticos de transición también conllevaron una fuerte oposición a reconocer las “verdades oscuras” del accionar de las estructuras estatales y los grupos paramilitares promovidos por estas. Por consiguiente, se impidió el reconocimiento de actores victimarios que fuesen perdonados y reincorporados a la vida civil y política.

De igual manera, es importante tener en cuenta que en contextos de transición política ni el proceso penal, ni una Comisión de la Verdad son la única solución para salir del conflicto. Esta tesis es planteada por Gonzales y Varney (2013); indican que la clave está en una combinación

inteligente de los distintos instrumentos de la justicia transicional, la fidedignidad con la que cuente la comisión; además del apoyo y participación entre las partes y el seguimiento de un proceso justo y reconciliatorio.

Por ello, se concluye que las comisiones de la verdad están mucho mejor diseñadas para recopilar lo sucedido en un contexto de violencia y no para generar entendimiento común, reconciliación o cambio social. Por lo tanto, es posible superar las limitaciones que dejan las comisiones de la verdad con ayuda de los procesos penales. Esta combinación facilita:

La restauración de la dignidad de las víctimas; contribuir a evitar el incumplimiento de la normativa internacional en materia de derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho internacional penal; y fomentar la complementariedad entre una verdad judicial que ofrezca mayores garantías sobre las responsabilidades individuales, y una verdad histórica y contextual significativamente más amplia sobre las causas de los crímenes de *ius cogens*. (Céspedes y Prieto, 2017, p. 142)

[78]

Con el fin de generar estos efectos beneficiosos, es necesario coordinar adecuadamente los objetivos, actuaciones y procedimientos entre el proceso penal y la Comisión de la Verdad para el intercambio de información. También es posible que ambos mecanismos actúen simultáneamente, reservando las actuaciones relativas a los máximos responsables sobre los procesos penales. Quizás establecen una clara demarcación entre las funciones de declaración, ejecución de la responsabilidad penal (propias de los procesos penales) y los objetivos de la Comisión de la Verdad, al respecto de promover la restauración de la dignidad de las víctimas; además de fomentar la reconciliación a través de una mayor articulación de las causas sociales, políticas, económicas y culturales de los crímenes ocurridos.

No obstante, existen otras posturas sobre el funcionamiento de la comisión y el proceso penal, por ejemplo, Peter Robinson²² apoya cual-

²² Ministro principal norirlandés, integrante del Partido Democrático Unionista (DUP)

quier iniciativa que facilite oportunidades a las víctimas de dar a conocer “su propia historia”, que deberá ser archivada y presentada al público de manera que puedan “hacer sus propios juicios de valor” (Alias, 2012). Sin embargo, no cree que forzar un proceso legal complicado de “contrainterroatorio” sea lo más adecuado.

Es decir, afirma que para el adecuado funcionamiento de una comisión hay que evitar la transmisión de la información obtenida por las comisiones hacia los procesos penales; cada vez que nadie preste declaración ante las comisiones de la verdad, si considera que esta puede ser utilizada en su contra ante los tribunales de justicia. Asimismo, para otros autores el uso de la información obtenida ante las comisiones en procesos penales afectaría los derechos y garantías de la defensa y el debido proceso.

La previa postura no se comparte en este estudio pues para eso se utiliza la justicia transicional que prevé mecanismos de judicialización para las partes victimarias. Sino se utiliza la justicia se decaería en impunidad y resultaría aún más grave para todos los testigos de lo pactado en el acuerdo.

[79]

También es clave el reconocimiento de amnistías e indultos condicionados, los cuales proporcionan otras salidas alternativas a la imposición de penas. Allí se puede conceder si se cuenta la verdad (como forma de reparar a la víctima) y no el uso de la omisión de la verdad para llegar a la justicia, pues no debe ser una alternativa de solución de conflictos; estaría violando un ordenamiento jurídico.

En suma, el análisis realizado muestra que tanto los procesos penales, como las comisiones de la verdad presentan fortalezas y debilidades. Su combinación no siempre disipa las resistencias generadas en influyentes actores sociales, políticos y económicos de los procesos de transición; quienes en el análisis del pasado ven una considerable amenaza a su posición. Tampoco supera los problemas relativos al inadecuado tratamiento en los mecanismos de recuperación de la verdad.

Sin embargo, permitiría una adecuada coordinación de objetivo que facilitaría la tarea de judicialización y reconocimiento de la verdad respectivamente, para garantizar los derechos de las víctimas y de los victi-

marios. Por lo menos en aras de asegurar la utilidad de estos dos mecanismos y por reconsiderar los grandes beneficios de su adecuado desarrollo, si desde el principio se aclara el rol de cada uno.

Aportes del Acuerdo del Viernes Santo.

El acuerdo de Belfast duró mucho tiempo en consolidarse, finalmente, su mayoría se aplicó lo pactado. Como ya se mencionó anteriormente, sus puntos acordados se centraron en la tolerancia, el respeto y no discriminación por las diferencias ideológicas o políticas. Aunque el contexto es totalmente diferente a otros países, sirve de ejemplo para muchas naciones que hoy en día están en una transición del conflicto a una paz por medio de negociaciones; también por medio de la aplicación a las políticas establecidas en lo pactado en acuerdos de paz, como es el caso colombiano.

Aunque el conflicto en Colombia se diferencia del norirlandés por ser un conflicto interno subsumido por problemas en el sector político, económico y social; tuvo su origen en las disimilitudes existentes entre partidos políticos, es decir, por quienes debían ostentar el poder y una ensangrentada lucha civil de clases sociales en pro de la igualdad y la adquisición de la tierra. Asimismo, el irlandés se diferencia del colombiano en que el conflicto se centraba en la discriminación por corrientes religiosas o ideologías políticas. Para Vicenç Fisas²³ (2006) resulta viable aprender de la experiencia de otros conflictos a través de sus procesos de paz exitosos y, de esa manera, tomar dichos modelos implementados.

[80]

Alcance del Acuerdo del Viernes Santo en el Acuerdo de Paz de Colombia.

Dentro de este marco, se dice que luego de la firma del Acuerdo de Viernes Santo, su éxito fue ocasionado porque no se perpetuó la violen-

²³ Director de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona.

cia. Según Vicenç Fisas (2013) para obtener este resultado se tuvieron que adaptar las siguientes medidas.

Entre 1998 y 2000 salieron de prisión 433 personas, en ocasión del régimen de libertad provisional, con 229 miembros del IRA. Las liberaciones condicionadas podían ser revocadas si se quebrantaban los principios Mitchell de no violencia; tanto fue el compromiso que solo nueve personas fueron detenidas de nuevo. Ahora bien, los combatientes sin causas pendientes con la justicia se les concedió directamente una amnistía. El periodo de amnistía inició el 30 de junio de 1998 y terminó el 26 de febrero de 2003.

Por otro lado, en enero de 2004 se creó la *Independent Monitoring Commission* (IMC) por un acuerdo entre los Gobiernos británico e irlandés y finalizó sus actividades en marzo de 2011. Su misión era monitorear la no utilización de la violencia en la vida política de Irlanda del Norte.

El cese al fuego de todos los actores involucrados incluyó también la de hostilidades, discriminación, matanzas indiscriminadas, terrorismo, entre otras actividades. Para alcanzar este objetivo la IICD fue impulsada por el presidente Clinton; creada el 26 de agosto de 1997 y concluida en marzo de 2011; su objetivo fundamental fue el desarme de los principales grupos paramilitares. El desarme final llegó después de que el IRA renunciara a la lucha armada y aceptara la vía política, a finales de septiembre de 2005.

Finalmente, la participación del pueblo resultó relevante y conllevó al éxito del acuerdo. Por ende, Vicenç (2011) indica que existió “el consentimiento paralelo”, para tomar decisiones se necesitaba la aprobación de la comunidad de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, facilitando el proceso de paz. De igual manera, Mantilla (2014) asevera que estos acuerdos contienen “beneficios mutuos asegurados” entre los grupos armados, su transición y posterior reintegración a la vida civil. Con la aprobación de la sociedad fue más fácil la defensa de los derechos humanos y la desmovilización de los grupos armados para pasar a la aceptación en la política y, de esta manera, contribuir activamente hacia la paz.

Estos factores desencadenantes del proceso de paz en Irlanda del Norte se pueden considerar para el caso colombiano. Por cuanto la sociedad civil quiere jugar ese papel de actor protagónico en materia de consecución de la paz; qué mejor manera de hacerlo que participar activamente en ese proceso. Por otro lado, el Gobierno colombiano también juega un rol importante; con el precedente en tema de conflicto armado llevado por Irlanda del Norte, ha servido de ejemplo para Colombia, como lo afirma Restrepo (2005):

El modelo que sirvió de inspiración inicial para la reflexión fue el proceso de paz de Irlanda del Norte, que terminó en el llamado “Acuerdo del Viernes Santo”. (...) Como producto de ese acuerdo, presos condenados por delitos graves y terrorismo obtuvieron la ex-carcelación en el marco de una declaratoria de cese de hostilidades. Desde entonces pensó Álvaro Uribe que este modelo podría inspirar medidas similares en Colombia. (p. 59)

De igual manera, hablando del impacto del Acuerdo del Viernes Santo, en particular, se quiere hacer un breve análisis sobre la comisión de la verdad, tema principal en esta investigación. En consecuencia, se procede a analizar cómo está previsto este asunto en el contexto colombiano.

Según la regulación predicha en el “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” del 12 de noviembre del 2016 (en adelante, acuerdo final para la paz), sobre la creación de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEVCNR) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); Colombia no resuelve adecuadamente la cuestión relativa a la coordinación de los objetivos, actuaciones y procedimientos de intercambio de información entre la comisión de verdad y el proceso penal, referidos en párrafos anteriores.

De hecho, la forma de trabajo entre la CEVCNR y la JEP es totalmente separada; no existe una clara división de funciones entre ambos. Por consiguiente, a partir de lo estipulado en el acuerdo final para la paz

(2016) se declara: “la información que reciba o produzca la Comisión no podrá ser trasladada por esta a autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio; ni las autoridades judiciales podrán requerírsela” (p. 134). Además, se deja sin resolver si los archivos creados por la CEVCNR estarán a disposición de la JEP al término de este, durante los próximos tres años (periodo de duración).

En Colombia existen varios aspectos que convendría revisar sobre la regulación finalmente recogida en el acuerdo final para la paz. En lo relacionado con la CEVCNR y la JEP, primero se deberían coordinar los objetivos, actuaciones y procedimientos de intercambio de información entre ambos mecanismos, para lograr mayor claridad. Segundo, en este marco especificar si los archivos creados por la comisión estarán a disposición de la JEP al término de sus actividades para que, de cierta forma, se lleve a cabo un proceso de justicia; de esta manera, no se decae en la impunidad de los máximos responsables del conflicto interno armado.

IV. En búsqueda de la paz en Sudán del Sur

Introducción

Sudán del Sur es una nación nueva que hasta hace pocos años formaba parte de Sudán. La independencia de este país se origina en el acuerdo general de paz de 2005. Allí se estableció la creación de un referéndum en la región del Sur, para la unidad o secesión de este país, concluido el período transicional en Sudán. Los motivos que llevaron a la búsqueda de la separación devienen de diferentes factores políticos, económicos, sociales y culturales. En principio, la zona sur del país no estaba de acuerdo con ciertas políticas del Gobierno de Jartum como la imposición de una cultura arábigo-islámica a pueblos cristianos y religiones africanas; así también, al relegar económicamente a ciertas zonas del país de los beneficios sociales y la infraestructura industrial que posee el norte del país.

De tal manera, tras negociaciones entre el Gobierno del presidente Omar Al Bashir y los representantes del Ejército-Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés (ELPS o SPLM), en el año 2005 se originó un proceso que concluyó en un régimen transitorio que incluyó un plebiscito, por el cual la mayoría de los votantes pidieron la separación del sur y la creación de un nuevo Estado. No obstante, es importante recordar que previo al proceso en Sudán se vivió una guerra civil de casi 30 años, por lo que ha sido una nación que ha estado inmersa en constantes enfrentamientos internos. Estos factores han influido en la historia del nuevo Sudán del Sur, luego de la separación llevó a que los dos nuevos Estados empezaran conflictos por la delimitación y obtención de recursos.

A lo largo del año 2012 los conflictos entre los Gobiernos de Jartum y el de Juba, por la delimitación de zonas petroleras, fueron uno de los principales impedimentos para que existiese un avance económico en Sudán de Sur. Posteriormente, en diciembre del 2013 los desacuerdos entre el presidente de turno Salva Kiir Mayardit y el vicepresidente Riek Machar desplegaron un conflicto que implicó la vida de miles de perso-

nas, junto con el desplazamiento forzado de millones de habitantes. De tal manera, se dio inicio a una nueva guerra civil en el marco de viejas enemistades étnicas.

Bajo el impacto de la presión internacional, en 2015 los líderes se vieron obligados a firmar el acuerdo para la resolución del conflicto de Sudán del Sur del mismo año. Sin embargo, el incidente de 2016 en Juba nuevamente generó enfrentamientos entre el ELPS y los rebeldes; ocasionaron que el vicepresidente tuviese que abandonar la ciudad. Estos acontecimientos han cuestionado la eficacia del acuerdo de 2015; además, a pocos meses de cumplirse los plazos acordados, el presidente Salva Kiir convocó una nueva resolución bajo la premisa de llamar a elecciones de forma inmediata, en caso de no llegarse a un acuerdo.

De esta manera, el objeto de este capítulo radica en la pregunta ¿cuál ha sido la actuación de Sudán del Sur en el marco de la justicia transicional para dar solución al conflicto existente y responder a las distintas violaciones masivas de derechos humanos en el país desde años atrás? En consecuencia, será la comparación con el caso colombiano en su proceso de paz.

[85]

Acuerdo general de paz de 2005: la historia de Sudán previo al referéndum de 2011

Históricamente, Sudán se ha caracterizado por su inestabilidad política, económica, incluso por sus diversos enfrentamientos interétnicos. La región sur del país ha atravesado dos desgarradoras guerras civiles (previo a su secesión), desde que el país se independizó en 1958. La última guerra civil inició en el año 1983 y el principal grupo rebelde era el ELPS, liderado por John Garang.

En el año 2002 inició un proceso de paz que pretendía dar fin a la guerra civil más larga de África; los principales protagonistas fueron el Congreso Nacional y el ELPS. Cabe destacar que en aquella época el Congreso se encontraba representado por la evolución del movimiento

islamista sudanés.²⁴ En este mismo año, el Gobierno de George W. Bush aprobó la Ley de paz de Sudán (*Sudan Peace Act*); estableció una política con el objetivo de un alto al fuego, mediante sanciones a Sudán por el uso de los ingresos derivados del petróleo, para financiar el conflicto interno. Por tanto, a este proceso de paz se le suma el apoyo económico y político de la Unión Europea; además, en junio de 2002 se da inicio a una ronda de negociaciones en Nairobi²⁵ con la mediación de la Autoridad Intergubernamental contra la Sequía y la Desertización (AISD) y observadores de Estados Unidos, Gran Bretaña y Noruega.

En julio de 2002 se firmó el protocolo de Machakos, era una especie de acuerdo marco que establecía las pautas del proceso hasta la firma del acuerdo de paz definitivo. En la búsqueda por la unidad de Sudán del Sur, y en pro de dar solución a los diferentes conflictos internos, en 2005 signaron el acuerdo general de paz entre el régimen islamista sudanés y la guerrilla del sur del país.

Dicho proceso intentó plasmar un nuevo Sudán que reconociera la pluralidad política, ética y religiosa en un marco democrático. Sin embargo, este proceso necesitaba de la concesión de ambas partes, para enfrentar las distintas resistencias internas en el movimiento islámico y entre las diversas facciones armadas del sur. Por otro lado, si bien los elementos de conflicto en la época tenían carácter étnico-religioso, el factor ligado con la extracción de recursos (como el petróleo) constituía uno de los principales focos de conflicto, pues se extraía principalmente en las provincias del sur.²⁶

²⁴ El movimiento islamista sudanés tuvo distintos procesos de evolución, en principio partieron como una acción social a la oposición armada, luego como los Hermanos Musulmanes en la década 1950, en los años 1960 se dieron a conocer como el Frente de la Carta Islámica y, como el Frente Islámico Nacional (FIN) en los años 1980. Este grupo accedió al poder de Sudán a través de un golpe de Estado en junio del año 1989 (Ortega, 2007, p. 228).

²⁵ En estas negociaciones el ELPS solicitaba el respeto y reconocimiento al derecho a la autodeterminación, al reparto equilibrado del poder y de las riquezas, el respeto de los derechos humanos y la conformación de un estado laico. En esta fase Al Bashir reconoce la denominación ELPS y deja de ser considerado como movimiento rebelde.

²⁶ A partir de la década de 1990 el petróleo pasa a ser tratado como una mercancía estratégica para lograr autosuficiencia del país y así atenuar el aislamiento internacional por parte del gobierno

No obstante, el acuerdo general de paz de 2005 no fue el primer intento de llevar a la paz a esta nación. En 1972 se realizó un acuerdo de paz de Addis Abeba, firmado por John Garang; fue enviado hacia las provincias meridionales para reprimir un levantamiento. Sin embargo, Garang terminó uniéndose a la guerrilla y años después daría origen al ELPS²⁷ en 1983. De tal manera, el movimiento surge como un grupo de oposición al movimiento islámico y su proyecto de civilización por parte del gobierno central (Díez, 2015).

Por una parte, el acuerdo general de paz de 2005 se caracterizaba principalmente como un acuerdo bilateral en el cual se necesitaba de la participación de la oposición política, para obtener resultados positivos e inclusivos (Ortega, 2007). El acuerdo incluía disposiciones relacionadas con la seguridad, el reparto de la riqueza y el poder; si bien buscaba la unión de Sudán, también reconocía que finalizado el período transitorio se realizaría un referéndum entre la población del sur para optar por la unidad o la separación.

[87]

Por otra parte, el acuerdo general de paz de 2005 ha sido criticado por “no ser completo”: no se pactaron soluciones a los conflictos entre otras partes de Sudán, como es el caso de Darfur. Además, otras fuerzas políticas fueron excluidas de las negociaciones, creando un acuerdo únicamente entre el movimiento islámico y el ELPS. Al respecto, Rolandsen (2011) considera que, si bien existían otros asuntos complejos pospuestos y no tratados en el acuerdo, un intento por incluirlos en las negociaciones hubiese generado mayor controversia y jamás se hubiera llegado a la firma de un acuerdo en 2005.

En el caso de John Garang, se considera que él buscaba la unidad nacional. Sin embargo, su trágica muerte en un accidente aéreo a un mes de la firma del acuerdo (en el que juraba como el primer vicepresidente de la Segunda República del Nuevo Sudán) demostró la fragilidad del go-

central. De esta manera, el petróleo se conformó en uno de los elementos clave para el desarrollo del conflicto armado interno y de la injerencia internacional (Ortega, 2007)

²⁷ El acuerdo alcanzado en 1972 dio fin a la primera guerra civil sudanesa, de esta manera, el presidente Gaafar Nimeri negoció con los rebeldes del sur.

bierno nacional; al suceder su cargo, Salva Kiir redireccionó la postura de la separación de Sudán del Sur de manera pacífica.

Con el paso de los años, en las elecciones nacionales de 2010²⁸ el acuerdo general de paz del 2005 no se convirtió en un vehículo para la transición democrática en Sudán pues no supuso la erradicación de la violencia en la región. En los años siguientes se caracterizaron por el recrudecimiento de los enfrentamientos en el sur (especialmente en la línea fronteriza) y las continuas violaciones al acuerdo (Alban, Suárez y Jaramillo, 2016).

El 15 de enero de 2011 se celebró el referéndum por el cual más de 3.85 millones de personas participaron con su voto. Así, el 98.83% se encontraba a favor de la secesión del sur y la creación de un nuevo país (Southern Sudan Referendum, 2011). Esto concluye un largo período de guerra civil de casi dos décadas de duración y que dejó al menos 1.5 millones de muertos (Nathan, 2011).

Por su parte, se ha cuestionado a Al Bashir (presidente de Sudán) por haberse encontrado de acuerdo con el referéndum de 2011. Sin embargo, en el contexto sudanés era difícil continuar combatiendo dos guerras civiles situadas en el sur y en el oeste del país (Nathan, 2011; Thomas, 2011). Mientras tanto, si bien la comunidad internacional apoyaba el cumplimiento del acuerdo general de paz de 2005, por el cual era legítimo el referéndum en virtud del derecho de autodeterminación contemplado desde el protocolo de Machakos; también se encontraba a favor de la unidad de Sudán (Deng, 2010).

Entonces, la secesión de Sudán implicó el incumplimiento del mayor reto planteado para la construcción de una nación plural en el acuerdo general de paz de 2005. Lo anterior, a causa de que este acuerdo bilateral no pudo dar solución a los problemas de identidad de Sudán (Ortega, 2007). No obstante, independientemente del modo en que se haya puesto

²⁸ Tras dos (2) decenios, en abril de 2010 se convocaron elecciones presidenciales multipartidistas. Se realizaron de manera independiente tanto en el norte como en el sur. Por mayoría, en el norte fue elegido Al Bashir; en el sur fue vencedor Salva Kiir. Estas elecciones nacionales fueron calificadas de “farsa”, ya que la competencia estuvo limitada y existieron incluso acusaciones de fraude generalizado

en marcha el acuerdo general de paz, el proceso de secesión había adquirido demasiado impulso histórico y político para verse influido de forma significativa por dicho acuerdo (Rolandsen, 2011).

El reto de la construcción de un nuevo Estado de Derecho frente al inicio de una nueva guerra civil

El 9 de julio de 2011 nació oficialmente Sudán del Sur. Se calcula que su población oscilaba entre 10.5 y 12 millones de personas (esta cifra no es exacta por la falta de un censo oficial); en un principio estaba conformado por diez y la ciudad de Juba se estableció como capital.²⁹ La presidencia fue asumida por Salva Kiir y la vicepresidencia por Riek Machar. Si bien Salva Kiir estaba apoyado por la etnia Dinka, Riek Machar era considerado el más prominente líder de la etnia Nuer, la segunda más grande luego de los dinka en Sudán del Sur.³⁰

[89]

La separación de Sudán del Sur generó distintos desafíos a superar: por un lado, el vínculo existente entre el norte y el sur, por la producción de petróleo representaría uno de los principales conflictos en el marco de la delimitación de los territorios. Por otro lado, la creación de una nación estable política, económica, social y culturalmente, en el marco histórico y geopolítico existente. También, sin olvidar que debía enfrentarse a la desmovilización, desarme y reintegración de casi 200.000 integrantes del ELPS. De acuerdo con el acuerdo general de paz de 2005, antes del referéndum de 2011 se aproximaba la reintegración de aproximadamente 100.000 integrantes a la vida civil. Sin embargo, a esa fecha solo 12.000 abandonaron las armas, la mitad mujeres no combatientes, ancianos e incapacitados (Baños, 2011).

En 2013 el presidente Salva Kiir otorgó amnistías e indultos a varios generales que participaron en la rebelión en contra del Gobierno. En este

²⁹ Según las cifras oficiales sursudaneses, el 60% de la población profesa la religión cristiana y un 22% la musulmana.

³⁰ Riek Machar ha sido cuestionado a lo largo de su carrera política, incluso tuvo confrontaciones con John Garang y se separó del ELPS en 1991.

mismo año, el Gobierno otorgó 3000 amnistías e indultos a los rebeldes que desde la independencia de Sudán del Sur habían iniciado una guerra en contra del Estado (Alban, Suárez y Jaramillo, 2016).

Con el paso del tiempo, el binomio político del gobierno central empezó a enfrentar distintas disputas políticas y personales, escondidos como viejas contiendas y rivalidades no resueltas de carácter tribal, traducidos en una inoperancia en la dirección del país y una lucha constante por el poder; además, agravada por la debilidad de las instituciones estatales y la corrupción generalizada, lo que conformaba una verdadera bomba de relojería (Díez, 2015). Esta realidad puso en duda la unión pacífica por tan variada agrupación de etnias y culturas.³¹

Por su parte, casi la totalidad del presupuesto de Sudán del Sur estaba basado en los beneficios obtenidos en la extracción de hidrocarburos. Además del petróleo, se estima que Sudán del Sur posee recursos en gas natural, yacimientos de minerales como oro, plata, cromo, magnesio, zinc, hierro, plomo, uranio, cobre, cobalto, coltán y níquel, entre otros recursos que incluyen diamantes (Baños, 2011).

[90]

El problema se agudiza debido a que el Gobierno de Sudán del Sur estaba controlado principalmente por los Dinka, por lo que existía un conflicto interétnico por la búsqueda del control de recursos (Thomas, 2011). En consecuencia, la secesión dio paso a una interrogante sobre si la separación del Sudán del Sur seguiría un camino civilizado o desataría un conflicto que generaría nuevamente una guerra civil interna. A partir de entonces los enfrentamientos se extendieron con rapidez a los Estados del norte; allí se encuentran grandes yacimientos de petróleo, lo cual condicionó y estableció el fundamento de una crisis que Salva Kiir y Riek Machar decidieron resolver en el campo de batalla (Díez, 2015).

Paralelamente, desde el incidente conocido como la “crisis de Heglig”, que condujo a enfrentamientos armados en la frontera de Sudán y Sudán del Sur por el dominio de campos petrolíferos en 2012; luego de

³¹ Dentro de la zona sur también existían distintos conflictos entre etnias, tal es el caso de los Misseria y los Shilluk que se encontraban confrontados con los Dinka.

la firma del acuerdo de paz en septiembre de ese mismo año empeoró la frágil unidad política del Gobierno. También se fue deteriorando en medio de una enorme crisis económica provocada por la imposibilidad de exportar petróleo, como consecuencia del conflicto fronterizo (Saavedra, 2017).

De este modo, la alegría por la independencia fue efímera. Las distintas dimensiones internas iniciaron un conflicto armado en diciembre de 2013; así, generó un efecto devastador para millones de civiles, apenas a dos años de la independencia (Amnistía Internacional, 2017). El motivo radicó en la expulsión de Machar de la vicepresidencia, por ser acusado de la planificación de un golpe de Estado en contra del presidente Kiir. Sin embargo, esta decisión se realizó luego de que Salva Kiir manifestara públicamente su intención de presentarse independientemente a las elecciones presidenciales de 2018.

Lo paradójico de este conflicto fue la postura de los gobernantes. De manera ilegítima incentivaron la lucha entre tribus mayoritarias, frente a los actos violentos suscitados en el territorio. Así, la comunidad internacional (liderada por la Iniciativa Gubernamental para el Desarrollo) de manera radical intentó dialogar con las facciones enfrentadas para así dar fin al conflicto, iniciar un proceso de paz y un alto al fuego. No obstante, este conflicto generó la mayor crisis de refugiados de África y la tercera a nivel mundial, después de Siria y Afganistán (ACNUR, 2017).

El acuerdo para la resolución del conflicto de Sudán del Sur de 2015

El 23 de enero del 2015 se obtuvo un acuerdo inicial de paz, gracias a los distintos esfuerzos diplomáticos. Allí se acordó el cese de hostilidades, la apertura de corredores humanitarios y la protección de civiles. Sin embargo, un día después se denunció el ataque de los rebeldes hacia las fuerzas regulares de Estados de Unidad, Alto Nilo y Jonglei, reiniciando la lucha armada y el manifiesto de los líderes por su falta de voluntad política e incapacidad para controlar las distintas facciones armadas (Díez, 2015).

Al respecto, el ministro de información sursudanés Michael Makuei señaló que el Gobierno rechazaba el reparto del poder y la riqueza, como la posibilidad de establecer un Gobierno de transición con rebeldes (EFE, 2014). De esta manera, el Gobierno estaba en contra de solucionar la crisis con un gobierno de transición, junto con la intervención o tutela de Naciones Unidas. Como fue la postura del Gobierno en el marco de una contrapropuesta, radicó en la formación de un gobierno provisional integrado por todas las fuerzas políticas, las cuales dirigieron el país hasta 2018, sin la presencia claramente del lado rebelde liberado por el entonces exvicepresidente Machar.

Mientras continuaban con los intentos de negociación, el principal afectado fue la población civil. Ellos sufrían asesinatos masivos de odio por motivos étnicos, junto con venganzas, asesinatos deliberados de civiles, ejecuciones sumarias, violencia sexual, incluso la esclavitud.

El 9 de mayo de 2014 en Addis Abeba, Etiopía, concluyeron un nuevo acuerdo. Allí la comunidad internacional empezó a presionar a los líderes ante los distintos actos de atropello masivo hacia los derechos fundamentales de la población civil. Por primera vez este acuerdo incluyó el compromiso de los dos líderes de oposición para dar el fin definitivo de los enfrentamientos y la instauración de un gobierno provisional de unidad nacional, reconociendo así que no existe una solución militar a la crisis en Sudán del Sur.

Si bien este acuerdo también constituyó otro fracaso más, para Jesús Díez Alcalde (2015) representó un avance significativo en el proceso de paz. Por primera vez se planteó la solución mediante el diálogo político inclusivo, junto con la implementación de reformas críticas contempladas en los acuerdos de paz; mediante la supervisión del proceso de reforma constitucional para así dar acceso a nuevas elecciones en Sudán del Sur.

Paralelamente, en este proceso se destaca la labor de la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD) pues ha sido el principal propulsor de la paz en Sudán del Sur. Asimismo, implantó la “fórmula IGAD plus”: en la incorporación de agentes internacionales y no regionales constituyó la incidencia y presión de manera colectiva sobre las partes

para obligarles a sellar la paz. De tal manera, a este proceso se unieron las Naciones Unidas, el Comité Especial de Alto Nivel de la Unión Africana para Sudán del Sur (Argelia, Chad, Nigeria, Ruanda y Sudáfrica), los Estados de la Troika (Estados Unidos, Noruega y Reino Unido), China, la Unión Europea y el Foro de Asociados de la IGAD (IGAD, 2015).

El 17 de agosto Riek Machar firmó el acuerdo definitivo de paz o denominado “Acuerdo para la resolución del conflicto de Sudán del Sur”. Además, el 26 de agosto el presidente Kiir en Juba firmó el convenio con reticencia. En este acuerdo constaba la creación de un gobierno de transición de unidad nacional; debía constituirse en 90 días y liderar el país por 30 meses. En este tiempo se establecería un proceso transicional que concluiría con la celebración de elecciones generales en 2018.

Entre otros puntos centrales del acuerdo destacan temas como la seguridad, el cese inmediato de hostilidades (plazo de 72 horas); la confinación de soldados en 30 días, la desmilitarización de Juba, la instauración de una comisión de seguimiento y evaluación formada por las partes en Sudán y representantes de la IGAD plus. Además, la creación de un tribunal mixto para Sudán del Sur para investigar y procesar a las personas acusadas de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otras violaciones de derecho internacional cometidas desde el 15 de diciembre de 2013 hasta el fin del período transitorio. Por último, el establecimiento de la Comisión de la Verdad, la reconciliación y la reparación para establecer un registro de violaciones de los derechos humanos entre julio de 2005 hasta la fecha del acuerdo (IGAD, 2015).³²

El cumplimiento del acuerdo tardó en dar inicio; incluso en el campo de la seguridad, la trasgresión del cese de hostilidades ha sido constante por parte de ambas partes. En el informe conjunto de la Misión de Naciones Unidas en Sudán se consideró que los actos del ESLP y de la oposición son calificados de “abusos y violaciones de derechos humanos

³² El presidente Kiir nunca estuvo de acuerdo con el acuerdo de paz, pero respondió a la presión internacional y así firmó el convenio que según su punto de vista beneficiaba principalmente a Machar y los rebeldes.

y del derecho internacional humanitario” (ONU y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [OHCHR], 2015).

El 24 de diciembre de 2015, tras aprobarse la reforma constitucional, Kiir decretó la división del país en 28 Estados, frente a los diez existentes. Este acto fue cuestionado por la oposición y por los miembros del IGAD plus; implicaba una maniobra para asegurar el dominio de los dinka en las zonas petroleras más importantes del país, mediante la premisa “divide y vencerás” y, de esta manera, exacerbar aún más el enfrentamiento étnico (Díez, 2015).³³

En enero de 2016 se empiezan a cumplir los compromisos asumidos en el acuerdo con la reintegración de la vicepresidencia de Rieck Machar. El 25 de febrero de 2016 el secretario general de Naciones Unidas Ba Ki Moon advirtió que “el respeto de los términos de paz no es una opción, es una obligación” (ONU, 2016). Sin embargo, la lucha por obtener mayores cuotas de poder en el gobierno de transición, y mantener el control sobre el petróleo, ha sido el principal obstáculo para la paz; teniendo en cuenta que los Estados afectados con mayor violencia son aquellos que poseen mayores reservas de petróleo.³⁴

En abril de 2016 Riek Machar regresó a Sudán del Sur y tuvo un reencuentro con Kiir lo que generó grandes expectativas para el establecimiento de una paz duradera. No obstante, el 8 de julio de 2016 un enfrentamiento entre escoltas de Machar y las guardias presidenciales de Kiir tuvo como resultado 273 muertos y cientos de heridos en las calles aledañas al palacio de gobierno. En dicho combate diezmaron las fuerzas nuer de Machar, además atacaron un campo cercano de refugiados en Yuba donde mataron, hirieron y violaron a civiles, incluyendo personal internacional de la ONU que realizaba funciones humanitarias (Saavedra, 2017).

³³ Esta decisión unilateral no se encontraba contemplada en el acuerdo y cuestiona la actuación del presidente Kiir.

³⁴ Estos son Alto Nilo, Unidad y Jonglei.

De nuevo, este acto inició una guerra civil y pasó por alto el acuerdo de 2015. Esta acción estratégica se llevó a cabo porque Kiir y Machar no estaban de acuerdo con el tribunal promovido por Amnistía Internacional y por la Federación Internacional de Derechos Humanos pues estarían constituidos por jueces de Sudán del Sur y de otros países africanos, con supervisión y apoyo de la ONU y de la Unión Africana. De este modo, los responsables de las distintas violaciones de derechos humanos hacia la población civil podían ser llevados a juicio, sin importar su etnia o posición en el poder. Esto incluía a Kiir y a Machar como posibles indiciados.

El 26 de julio Taban Deng Gai es nombrado vicepresidente de Sudán del Sur, mientras que Machar volvió a la lucha. Luego de varios meses, próximo a cumplirse el periodo de transición en un comunicado en diciembre de 2017, manifestó su interés de realizar otro acuerdo con la oposición y así lograr la paz. En caso de no llegar a un acuerdo, automáticamente se convocaría a elecciones generales por lo que nuevamente el mundo se encuentra ante la expectativa de la reunión llevada a cabo a finales del mes de abril de 2018 (Europa Press, 2018a).

[95]

El beneficio de la guerra civil: *the sentry project report*

En septiembre de 2016 The Sentry presentó un informe denominado “War Crimes Shouldn’t Pay: Stopping the looting and destruction in South Sudan” (en español, los crímenes de guerra no deberían pagar: deteniendo el saqueo y la destrucción en Sudán del Sur). En esta investigación se desvela el enriquecimiento generado a costa de la guerra civil iniciada en 2013. De esta manera, tras dos años de seguir el curso del dinero que asegura la economía de Sudán del Sur, este informe publicó los hallazgos sobre los vínculos entre la corrupción del Gobierno y el conflicto armado.

La participación del Gobierno, en especial de altos funcionarios y sus familias, durante la suscripción de contratos (en muchos casos inconstitucionales) generaron beneficios económicos. Convirtieron un problema político y étnico en un negocio altamente rentable, acumulando una riqueza significativa desde la firma del acuerdo general de paz en 2005.

Durante esta década la cúpula del Gobierno, incluso de la resistencia, acumularon propiedades de alta gama dentro y fuera del país, incluyendo actividades como la explotación de petróleo. En efecto, los miembros de las familias del presidente Kiir y el exvicepresidente Machar participaron en actividades comerciales, como es el caso del hijo de 12 años del presidente Kiir y su cooperación en un holding (The Sentry, 2016).

De acuerdo con el ordenamiento jurídico de Sudán del Sur es ilegal el ejercicio de actividades comerciales por parte de quienes ejerzan cargos constitucionales en funciones. Además, la ley del ELPS de 2009 prohíbe el nepotismo y las prácticas corruptas de su personal bajo pena de prisión. Todas estas transacciones se han manejado dentro del sistema internacional bancario; dicha realidad implica la necesidad de medidas emergentes en contra del lavado de activos.

Paradójicamente, tanto el presidente Kiir y el exvicepresidente Machar han intercambiado acusaciones sobre la premeditación de intentos de golpes de Estado, corrupción y abuso de poder. Estas acciones evidencian la fragilidad de sistema como también el reconocimiento por parte del gobierno central de la existencia de corrupción dentro de su Gobierno. Al respecto, se ha estimado una pérdida de cuatro billones de dólares no contabilizados o que han desaparecido en manos de antiguos y actuales funcionarios públicos (The Sentry, 2016).

En este contexto de corrupción, el país perdió ingresos petroleros y ha visto un aumento dramático en la inflación, con la grave escasez de divisas y una importante contracción de la economía general del país. Por lo anterior, la rápida acumulación de riqueza por parte de la cúpula del Gobierno ha sido tan audaz y descarada, como devastadora. Todos estos efectos han recaído sobre la población civil, lo que permite comprender el problema real del proceso de paz en Sudán: para sus gobernantes no representa una nación, sino una empresa familiar de la cual han podido saquear para acceder a magnos caprichos y grandes infraestructuras, a costa de la hambruna, miseria y destrucción de un pueblo. Entonces, mientras exista el terror en Sudán del Sur no se podrán controlar los distintos actos de corrupción evidenciados en este informe, como tampoco responsabilizar a sus principales actores.

Las cifras del conflicto: la población civil en el marco de la guerra

Es importante destacar el otro lado del conflicto y son las víctimas de esta guerra. En este sentido, la población civil ha sido blanco de la animosidad entre etnias nuer y dinka. Dentro de este proceso se han denunciado distintos actos de violencia en contra de civiles, como también el reclutamiento forzado de niños; el asesinato selectivo; abusos sexuales colectivos; la quema y destrucción de viviendas, cultivos y otros medios de subsistencia, para así expulsar a la población de sus tierras. Al respecto, han sido muy pocos los lugares considerados seguros en áreas de conflicto pues las partes han atacado de manera intencional a refugios, lugares de culto, hospitales, incluso bases de la ONU (2016).

En el campo de la justicia se han cuestionado los casos de detención prolongada, arbitraria y la privación de libertad de menores; además del existente déficit de personal judicial, resolviendo con jueces locales las causas penales, sobre los cuales no tienen competencia (ONU, 2016). En 2016 la cifra de desplazados ascendió a 2.3 millones, incluidos 1.69 millones de desplazados internos, de los cuales más de 199.000 residen en seis emplazamientos de protección de civiles de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur (UNMISS) y 648.719 refugiados en países vecinos.

En el marco de seguridad alimentaria, en 2015 aumentó considerablemente e incluso se llegó a estimar que 40.000 personas en el sur de unidad enfrentaban una carencia extrema de alimentos, resultante en la inanición, indigencia y la muerte. Este elemento se propagó a otras zonas hasta ese momento consideradas seguras, como la región de Gran Ecuatoria, Lagos, Baht el-Ghazal Septentrional y Warrap. En el campo de la salud, debido a los efectos del desplazamiento se han registrado graves problemas y muertes por enfermedades prevenibles. En 2015 más de dos millones de casos de malaria ocasionaron la suma de 1.340 muertes, sin posibilidad de cobertura de vacunación; así, la población se encuentra potencialmente en riesgo (ONU, 2016).

En el marco de la libertad de expresión, existen amenazas contra periódicos y detenciones de periodistas y defensores de los derechos humanos, como es el caso del periódico *Beitna* y el diario *El Tabeer*. El informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas de febrero de 2018, sobre el derecho a la libertad de expresión en Sudán del Sur, analiza los desafíos que enfrentan los individuos para expresar sus opiniones y puntos de vista en el marco de la política, seguridad, negociaciones de paz y demás acontecimientos que afectan al país.

De esta manera, expone que se han confirmado 60 incidentes que incluyeron la muerte de dos individuos, el arresto y detención arbitraria de 58 personas; el despido de su lugar de trabajo de 16 personas, seguidos de actos de intimidación, hostigamiento y otras formas de violencia. Por otro lado, nueve instituciones de medios han sido sujetas a restricciones; cuatro de ellas han sido cerradas o suspendidas pues sus opiniones son percibidas por el Gobierno como “críticas”. Por lo anterior, el proceso de censura se encuentra en aumento; las víctimas no han presentado denuncias formales por el miedo a represalias por la impunidad persistente de violaciones de derechos humanos (OHCHR, 2018).

[98]

De acuerdo con Amnistía Internacional, los actos de violencia sexual desde diciembre de 2013 son premeditados y de gran escala en los cuales someten a mujeres a violaciones en grupo, incluyendo agresiones sexuales con objetos e incluso mutilaciones con cuchillos. En algunos casos los agresores mataron a las víctimas luego de violarlas. En el caso de los hombres también se han registrado actos de violación, castración e incluso han sido prendidos fuego mientras se encontraban con vida.

En este sentido, para Muthoni Wanyeki algunos ataques están dirigidos a aterrorizar, degradar, avergonzar a las víctimas y, en algunos casos, para impedir que los miembros de partidos políticos rivales puedan procrear. En consecuencia, el Gobierno de Sudán del Sur debe tomar medidas deliberadas para detener esta epidemia de violencia sexual pues muchas de las víctimas son atacadas por su origen étnico (Amnistía Internacional, 2017).

Por su parte, la población infantil es víctima de desnutrición, enfermedades, reclutamiento forzoso, violencia y falta de escolarización. Así lo refleja el informe de Unicef “Childhood Under Attack” (en español, infancia bajo ataque) según el cual el impacto de la guerra amenaza a una generación entera. Por consiguiente, casi 3 millones de niños están en situación grave de inseguridad alimentaria; más de 1 millón sufre desnutrición aguda; 2.4 millones se han visto obligados a huir de sus hogares y 2 millones de niños están fuera de la escuela.

Si la situación actual se mantiene, es posible que solo uno de 13 niños terminen la escuela primaria. Casi 900.000 niños sufren traumas psicológicos y más de 19.000 han sido reclutados en las filas de las fuerzas o grupos armados. Más de 2.300 niños han muerto o han sido heridos desde el comienzo del conflicto en diciembre del 2013, sin hablar de los cientos de casos de violaciones y agresiones sexuales (Unicef, 2017).

Análisis de la eficacia de proceso de paz en Sudán del Sur

Conforme a los distintos acontecimientos analizados en este capítulo, se evidencia que a la larga el acuerdo general de paz de 2005 implicó el inicio de un nuevo conflicto en Sudán del Sur. Por un lado, por parte de los líderes de las etnias dinka y nuer los acuerdos comerciales iniciados en esta fecha ponen en manifiesto el inicio de una pugna por el control del poder y los beneficios que aportaría el petróleo a sus economías familiares. En este sentido, si bien el acuerdo general de paz de 2005 cumplió lo pactado con el referéndum, esta secesión impidió que en la región de Sudán del Sur se establecieran modelos de justicia transicional pues el conflicto estalló a pocos meses de su independencia (Alban, Suárez y Jaramillo, 2016, p. 226).

Ante estos acontecimientos, expertos han cuestionado que quizás la independencia de Sudán del Sur pudo haber sido prematura. Además, consideran que la única solución posible es que el país aprenda bajo una mayor supervisión internacional, para conducirse como un verdadero es-

tado (De Rojas, 2014, p. 12). Al respecto, ante la presión y participación internacional, la posición del Gobierno es clara. A pesar de que se logró un avance con el acuerdo de 2015, el presidente Kiir no estuvo de acuerdo con el ingreso de las fuerzas de protección regional; considera que su presencia representa una intervención e intromisión en los asuntos internos del gobierno (Saavedra, 2017).

Por otro lado, si bien la situación en este país es emergente, los conflictos en los cuales la cúpula del Gobierno y los rebeldes se encuentran involucrados, se han caracterizado como étnicos y como un devenir de tiempos inmemoriales. No obstante, en la actualidad no se puede hablar de un conflicto eminentemente étnico; a pesar de que en principio lo es, su principal motor es político y económico. Los efectos en la población civil afectan a distintas etnias y acrecienta los enfrentamientos interétnicos, por la inestabilidad del gobierno central. Todos estos actos impiden la consolidación de una unidad nacional; no solo existen estas dos etnias en Sudán del Sur, incluso, se ha llegado a calcular hasta 600 etnias y tribus heterogéneas en cuanto a cultura y forma de vida (Langa, 2014).

[100]

En consecuencia, no se trata solamente de la intención política, este conflicto se fue de las manos de los líderes tanto del ELPS, como de la oposición; no poseen el control total de los movimientos e incluso el cambio de bando de la esposa del exlíder del ELPS John Garang genera muchos interrogantes. En este sentido, la comunidad internacional ha sido el principal propulsor del acuerdo para la solución del conflicto en la República de Sudán del Sur de 2015 y, si bien la creación del gobierno de transición de unidad nacional trajo esperanzas, no duraron mucho por su pronta disolución en los enfrentamientos de julio de 2016.

Por otra parte, la comunidad internacional aceptó el gobierno reconstituido de Juba, pero el líder de oposición y sus aliados lo rechazaron (Amnistía Internacional, 2017a). Entonces, el Acuerdo de 2015 no aumentó la seguridad, por tanto, su legitimidad y pertinencia disminuyeron en 2017. En diciembre se firmó el acuerdo de cese de hostilidades entre el Gobierno y los grupos rebeldes pero poco tiempo después estallaron nuevamente los conflictos en diversas partes del país (Amnistía Internacional, 2017b).

Actualmente, a poco tiempo de cumplir con los plazos establecidos en el acuerdo de 2015, el presidente Kiir buscó la creación de un nuevo acuerdo negociado a fines del mes de abril del 2018, bajo la premisa de que, al no poder llegar a un consenso, se convocarán a elecciones de manera inmediata. Por su parte, el líder rebelde Riek Machar presentó una proposición para relanzar el acuerdo de 2015 que contemplaba la creación de un gobierno de transición durante un período de 27 meses. Asimismo, solicitó que la distribución territorial volviera a los Estados existentes antes de la firma del acuerdo; también que se diera un mejor reparto de las cuotas de poder en el Gobierno. Paralelamente, dentro de la propuesta de Machar de 2018 radica la participación de las fuerzas de protección regional dentro del periodo de transición para garantizar la seguridad (Europa Press, 2018b).

[101] Estos planteamientos generan conmoción pues se desconoce si es una estrategia más para mantener el poder o una forma de escapar de los compromisos asumidos en el acuerdo de 2015. Es elemental recordar que ambos líderes estaban en desacuerdo con uno de los principales puntos: la creación del Tribunal Híbrido de Sudán del Sur pues posiblemente podrían ser procesados como responsables de distintos delitos (Saavedra, 2017). Como conclusión, el mundo y el pueblo de Sudán del Sur se encuentran nuevamente a la expectativa de un nuevo acuerdo que conlleve la paz a esta nación. No obstante, el 23 de mayo de 2018 se finalizó la última ronda de conversaciones de paz sobre Sudán del Sur; ninguna de las partes llegó a un acuerdo, después de rechazar la propuesta del IGAD sobre un reparto de poderes (Europa Press, 2018c).

Sudán del Sur como precedente en el contexto colombiano

Como precedente a nivel mundial, el caso de Sudán del Sur es interesante pues demuestra que la justicia transicional a veces es un sinónimo de estabilidad antes que transformación social. Esto se debe a que antes de una transformación social, el Estado necesita un período de estabilidad

para alcanzar la paz. Por tanto, la crisis en Sudán del Sur permite reconsiderar el modelo tradicional de justicia transicional; este conflicto posee circunstancias diversas que necesitan otras respuestas para generar resultados a los principales problemas que afectan a la población.

En este sentido, el acuerdo para la resolución del conflicto de Sudán del Sur de 2015 contiene elementos claves para la resolución del conflicto y establece un paquete de medidas tradicionales, característico de estos acuerdos, como el pacto entre las partes de un alto al fuego permanente aplicado a las fuerzas bajo su mando. También la creación de un gobierno de transición y unidad nacional; el llamado a elecciones nacionales; garantizar la ayuda humanitaria mediante la reforma de sectores de la economía y seguridad; así como también la creación de un tribunal mixto (híbrido) para Sudán del Sur y una Comisión de la Verdad, la reconciliación y la recuperación. Si bien cada una de estas medidas contiene una solución para dar fin al conflicto, también son parte de su fracaso. En el marco de la presión internacional se firmó el acuerdo entre las partes sin que existiese un real esfuerzo por averiguar de antemano qué se lograría en términos razonables.

[102]

Por lo tanto, los conflictos actuales requieren nuevas medidas atendiendo al contexto político, social, económico e incluso cultural de una sociedad. En este sentido, se puede señalar que el contexto de Sudán del Sur, Siria, la República Democrática del Congo, Irak, Yemen y Somalia representan nuevos retos para la transformación de la justicia transicional. Difieren de los casos vanguardistas que dieron origen a este proceso como los casos de Argentina, Chile y Sudáfrica.

De tal forma, considera que la transformación de la justicia transicional no debe centrarse únicamente en la transformación de la sociedad en las próximas décadas, sino dar una respuesta directa para solucionar el conflicto, brindando estabilidad a corto y mediano plazo. Por tanto, no debe ser únicamente encaminada al enjuiciamiento de delitos de carácter internacional; por la magnitud de estos conflictos también se debe establecer un beneficio tangible hacia las víctimas y restablecer las bases para una noción de reconciliación significativa.

En consecuencia, el fracaso del acuerdo de paz de 2015 tiene una respuesta: la aplicación de mecanismos ajenos a la realidad local, por la cual se prometieron cosas que al final no se pudieron cumplir. Entonces, la falta de eficacia de un acuerdo de paz desacredita la figura de la justicia transicional en un país. En el caso de Sudán del Sur, la figura de un alto al fuego era difícil, incluso los líderes de Gobierno y de la oposición no tenían control absoluto sobre las distintas facciones armadas. Por otra parte, la justicia transicional fue concebida para ayudar a restablecer el Estado de derecho, sin embargo, como Sudán tenía su carácter eminentemente nuevo, se trataría de constituir un Estado de derecho y dar respuesta a las víctimas en virtud del principio de igualdad, atendiendo otros puntos emergentes como el restablecimiento de derechos territoriales, de vivienda y propiedad.

[103] Actualmente se sigue negociando un nuevo acuerdo en el cual las partes han señalado que no existe atajo para la paz y esta vez no aceptarán la imposición de un acuerdo. En el caso de la oposición, han rechazado la propuesta del IGAD al ser calificada como parcial y no reflejar todas las peticiones de la población. En este sentido, la oposición busca que se cumpla el acuerdo de 2015 mediante el regreso al Gobierno del exvicepresidente. Sin embargo, el principal problema radica en la propuesta del IGAD de realizar un reparto de poderes de los cuales el 55% serían nombrados por el Gobierno, el 25% encabezado por la oposición liderada por Riek Machar y el 20% al resto de partidos (Europa Press, 2018d).

A futuro, esta propuesta podría generar nuevos enfrentamientos, como los que sucedieron en Juba en 2016. El origen del problema en Sudán del Sur es la lucha por el poder, por lo cual, un reparto inequitativo daría continuidad al conflicto. De esta manera, en el caso colombiano se parte señalando que son dos conflictos con orígenes totalmente distintos; Sudán del Sur parte de otro proceso transicional, como fue el iniciado en Sudán en el año 2005. Sin embargo, enseña que el proceso para la paz no es una regla exacta y si bien debe atender a la sanción de los delitos cometidos, tiene que centrarse en la reconciliación de las partes y la reparación hacia las víctimas. Solo de esta manera se puede volver a un modelo de Estado de derecho mediante la primacía del principio de igualdad.